

El presidente electo ha tenido que adelantar funciones

Gobierno de urgencia: radiografía a los desafíos de José Antonio Kast

Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, analiza las áreas con retos más importantes que asoman en el futuro gobierno del republicano, incluida la reconstrucción tras los incendios.

Por Rodrigo Arellano



Esta semana el presidente electo oficializó a sus ministros.



Rodrigo Arellano, vicedecano Facultad de Gobierno Universidad del Desarrollo.

José Antonio Kast llegará como el nuevo presidente a La Moneda el 11 de marzo de 2026 con el respaldo electoral más amplio desde el regreso a la democracia: más de 7,2 millones de votos y un 58% de las preferencias en segunda vuelta. Este contundente resultado popular se ve inmediatamente tensionado por una realidad que no admite pausas: las urgencias que deberá enfrentar. Los megaincendios devastadores en el sur del país, una crisis de seguridad que sigue marcando la agenda ciudadana, una economía que busca recuperar dinamismo y un Congreso donde, pese al avance de la derecha, las mayorías seguirán siendo esquivas.

El presidente electo ha tenido que adelantar funciones incluso antes de asumir. La tragedia de los incendios en Nuble y Biobío, con al menos 20 muertos, más de 50.000 evacuados y cientos de viviendas destruidas, obligó a una inédita conferencia de prensa conjunta con el presidente Gabriel Boric en La Moneda. El gesto de unidad reveló tanto la magnitud de la emergencia como la madurez política que el momento exige. Kast evitó las críticas directas al gobierno saliente, pidió "mirar hacia adelante" y ya designó a Iván Poduje y Martín Arrau, futuros ministros de Vivienda y Obras Públicas, para liderar el plan de reconstrucción. La señal es clara: el nuevo gobierno quiere diferenciarse de lo ocurrido tras los incendios de Valparaíso, donde la lentitud en el proceso de reconstrucción dejó a cientos de familias sin solución habitacional por meses.

PRIMERA PRUEBA

Los incendios del pasado fin de semana han dejado más de 30.000 hectáreas quemadas y la provincia de Concepción como epicentro de la devastación. El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, resumió la tragedia con crudeza: "Penco se está quemando y me lo están saqueando". La combinación de fuego, saqueos y colapso de servicios básicos configura un escenario que demandará recursos extraordinarios y, sobre todo, una gestión extremadamente rápida, que contrasta con las promesas de austeridad fiscal del programa republicano. Kast ha sido enfático en su compromiso: "No queremos que se repita lo que ocurrió en Valparaíso, donde ha pasado mucho tiempo sin que las familias hayan recuperado su hogar". Para ello, ha solicitado castros detallados, fotografías satelitales de la Fuerza Aérea y coordinación permanente con el gobierno saliente. El mensaje político es doble: por un lado, demuestra disposición a trabajar con el adversario cuando las circunstancias lo exigen; por otro, deja establecido un estándar contra el cual será medido. Si la reconstrucción se demora, las promesas de "eficiencia" y "gestión" que caracterizaron su campaña quedarán cuestionadas.

El desafío de gobierno público no será menor. El programa de gobierno contempla un ajuste fiscal de 6.800 millones de dólares en 18 meses, pero la reconstrucción demandará recursos cuantiosos. Aquí aparece la primera tensión estructural del nuevo gobierno: cómo compatibilizar la promesa de reducir el gasto público con la necesidad imperiosa de responder a una emergencia que, por su naturaleza, requiere gastos inmediatos y significativos. La respuesta probable pasará por reasignaciones presupuestarias, pero el margen de maniobra será limitado, como prometió Kast, los programas sociales permanecen intactos.

DELINCUENCIA

La seguridad y el combate a la delincuencia fue, sin duda, el eje vertebral de la campaña de Kast. Su "Plan Implacable", su "Operación Rescate Capital" y propuestas carcelarias convencieron a un electorado agotado por la sensación de inseguridad. Sin embargo, las cifras oficiales muestran una realidad más matizada que el discurso de campaña: Chile registra tres años consecutivos de baja en la tasa de homicidios. En el primer semestre de 2025, la tasa descendió un 13,8% respecto al mismo periodo del año anterior, ubicándose en 2,5 homicidios por cada 100.000 habitantes. El año 2024 cerró con 2.202 víctimas de homicidio, la cifra más baja desde 2021, con una tasa de 6 por cada 100.000 habitantes. Para dimensionar Chile sigue siendo uno de los países menos violentos de América Latina, con ta-

tas muy por debajo de Ecuador, Brasil o Venezuela. Esto no significa que el problema de seguridad sea menor o que la ciudadanía no tenga razones para preocuparse: el crimen organizado transnacional, especialmente el Tren de Aragua, ha penetrado los territorios antes considerados seguros, y los homicidios vinculados a ajustes de cuentas y control territorial han modificado la naturaleza del delito.

El programa de Kast apunta a varias preocupaciones y el principal desafío será traducir estas propuestas en resultados perceptibles para la ciudadanía. La brecha entre la mejor estadística de los homicidios y la persistente sensación de inseguridad sugiere que el problema no es solo de cifras, sino de presencia estatal en barrios críticos, de recuperación de espacios públicos, de respuesta efectiva ante delitos cotidianos como los portonazos, las encerronas y los robos con violencia. Aquí, las promesas deberán confrontarse con las limitaciones institucionales, presupuestarias y legales que enfrentará cualquier gobierno.

INVERSIÓN, PERMISIOLOGÍA

El programa económico de Kast descansa sobre un diagnóstico compartido por amplios sectores: Chile ha perdido dinamismo. Tras más de una década de bajo crecimiento, con tasas que apenas superan el 2% anual, la competencia con los países desarrollados se ha estancado. El Banco Central proyecta un crecimiento de entre 2% y 3% para 2026, cifras que, si bien mejoran respecto a años anteriores, siguen lejos del 4% prometido por el presidente electo.

La apuesta central pasa por la inversión privada. El equipo económico de Kast, liderado por el ministro Jorge Quiroz, ha identificado 7.000 y 10.000 millones de dólares en proyectos paralizados por trabas regulatorias. Una de las primeras medidas se-

rá convocar al Comité de Ministros para destrabar inversiones detenidas en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. La "permisiología" será combatida mediante modificaciones regulatorias, nuevas guías del Servicio de Evaluación Ambiental y simplificación de procesos en la Dirección General de Aguas. Todo parece indicar que este camino va por la senda correcta para elevar el puntaje inicial a atraer nuevos recursos.

En materia tributaria, el programa propone reducir el impuesto corporativo del 27% al 23%, con la posibilidad de llegar al 20% para empresas que contraten trabajadores en riesgo de informalidad. La apuesta es que menores impuestos estimularán la inversión y, con ella, el empleo formal. Los críticos advierten que la menor recaudación presionará aún más las finanzas públicas, especialmente si el ajuste de gasto prometido no se concreta con la velocidad esperada.

El mercado laboral presenta señales mixtas. La tasa de desempleo bajó al 8,4% en octubre de 2025, con mejoras significativas en el empleo femenino. Sin embargo, el nivel sigue por encima del promedio histórico, y la creación de puestos de trabajo formal avanza con lentitud. La OCDE proyecta que el desempleo se mantendrá elevado durante 2025 (8,4%) antes de descender a 7,4% en 2026. El éxito de Kast en esta materia dependerá de su capacidad para generar confianza empresarial y traducirla en contrataciones efectivas.

JUSTE: CIERRE DEL CÍRCULO

6.800 millones de dólares en 18 meses fue, probablemente, la propuesta más cuestionada de la campaña. El economista Bernardo Fontaine, encargado de los primeros 90 días de gobierno, ha delineado tres "bolsos" de ahorro: frenar abusos (licencias médicas fraudulentas, evasión en transporte público, corrupción



Kast y su futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, se desahogaron en la "zona cero".

en fundaciones), mejorar la eficiencia del Estado (compras públicas, programas duplicados) y austeridad en la administración (prohibición de nuevos asesores a honorarios, revisión de contratos vigentes). La promesa de no tocar los programas sociales es quizás el mayor desafío. El grueso del gasto público chileno está comprometido en pensiones, salud, educación y transferencias directas. Recortar 6.000 millones sin afectar estas partidas implica concentrar el ajuste en áreas de menor peso presupuestario, donde los márgenes de ahorro son necesariamente limitados. El "Presupuesto Base Cero" anunciado —que obliga a cada ministerio a justificar el 100% de su gasto desde cero— puede generar eficiencias, pero también resistencias burocráticas y retrasos en la ejecución presupuestaria.

Un buena noticia en el mercado internacional puede generar un alivio a las arcas fiscales: el precio del cobre. El metal superó los 5 dólares por libra en noviembre de 2025, muy por encima de las proyecciones. Cada centavo adicional en el precio promedio anual genera entre 30 y 60 millones de dólares extra para el Fisco. Si los precios se mantienen elevados, el gobierno contará con ingresos extraordinarios que aliviarán la presión fiscal. Aunque, apostar el equilibrio presupuestario a la volatilidad de los commodities es por definición riesgoso.

GOBERNABILIDAD

Las elecciones parlamentarias de noviembre de 2025 configuraron un Congreso favorable para Kast. En la Cámara de Diputados, el Partido Republicano emerge como la primera fuerza con 31 escaños, seguido por la UDI (18) y el Frente Amplio (17). El pacto "Cambio por Chile" (Republicanos, Partido Social Cristiano y Nacional Libertario) obtuvo 42 diputados, mientras que "Chile Grande y Unido" (Chile Vamos y Demócratas) sumó 34. En total, la oposición a la izquierda alcanzó 76 de 155 diputados. La gran sorpresa fue el Partido de la Gente, que pasó de cero a 14 diputados. Esta bancada, liderada a distancia por Franco Parisi, se perfila como el fiel de la balanza en votaciones ajustadas. Su posición ideológica ambigua introduce un factor de incertidumbre en la siempre compleja aritmética parlamentaria.

El Senado presenta un panorama más equilibrado: 25 senadores de oposición frente a 23 del oficialismo saliente, con dos independientes que podrían inclinar la balanza. Para reformas constitucionales y leyes orgánicas (que requieren 4/7 de los votos), el gobierno de José Antonio Kast necesitará negociar con sectores moderados de la centroizquierda o, al menos, conseguir la abstención de algunos senadores. Esto limita severamente la posibilidad de cambios estructurales profundos sin construcción

de consensos amplios.

Por otro lado, la conformación del gabinete dejó tensiones políticas. Chile Vamos y la UDI reclamaron mayor presencia de militantes propios frente a los independientes de confianza de Kast. El Partido Nacional Libertario, que apoyó en segunda vuelta, rechazó integrar el gobierno argumentando que la oferta limitaba su influencia. Esta fragmentación de la coalición gobernante podría anticipar dificultades para mantener disciplina parlamentaria en votaciones clave.

José Antonio Kast asume su mandato con un gran apoyo en las urnas, pero con márgenes de maniobra institucionales limitados. Su gobierno será juzgado, en primer lugar, por su capacidad de responder a emergencias inmediatas como los incendios del sur. La reconstrucción eficiente y rápida de las viviendas destruidas será el primer test de credibilidad para una administración que prometió gestión y resultados.

En seguridad, el desafío es doble: reducir efectivamente la victimización y, al mismo tiempo, modificar la percepción ciudadana de inseguridad que no siempre se correlaciona con las estadísticas. Las medidas de "mano dura" deberán equilibrarse con respeto a garantías fundamentales, especialmente en un contexto donde organismos internacionales están atentos a posibles excesos.

La reactivación económica dependerá de factores parcialmente fuera del control gubernamental: confianza empresarial, precios de materias primas, contexto global. Lo que sí puede hacer el gobierno es remover obstáculos regulatorios, agilizar permisos y enviar señales claras de estabilidad jurídica. Si logra destrabar los miles de millones en inversiones paralizadas, el impacto en empleo y crecimiento podría materializarse durante su mandato.

El ajuste fiscal prometido parece, en su versión más ambiciosa, difícilmente realizable sin afectar servicios públicos o programas sociales. Es probable que el gobierno deba moderar sus expectativas y extender los plazos, especialmente si la reconstrucción post-incendios demanda recursos extraordinarios. La coherencia entre el discurso de austeridad y la práctica presupuestaria será observada con lupa por analistas y calificadoras de riesgo.

Finalmente, la gobernabilidad requerirá habilidades de negociación que no siempre han caracterizado al estilo político de Kast. El tránsito desde una posición de confrontación ideológica hacia la construcción de mayorías parlamentarias es un proceso complejo. El éxito o fracaso de su gobierno dependerá, en buena medida, de su capacidad para tender puentes con sectores moderados sin alienar su base más dura. Es un equilibrio difícil, pero no imposible. En los próximos meses podremos ver si todo va a estar bien.